



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, seis (06) de octubre de dos mil veinte (2020)

Auto Interlocutorio No. 276

MAGISTRADO PONENTE: OMAR EDGAR BORJA SOTO

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE:	76001-33-33-018-2019-00161-01.
DEMANDANTE:	JOSE FERNANDO SALAZAR BOLAÑOS
DEMANDADO:	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – REVOCA AUTO DE PRIMERA INSTANCIA.
CORREOS	<p>Demandante: Victordcastano@hotmail.com Castanooviedohectorfabio@gmail.com</p> <p>Demandado: Departamento del Valle del Cauca.</p> <p>Ministerio Público: fjmoreno@procuraduria.gov.co</p>

Aprobada en Sala y Acta de la fecha. Convocatoria No. ____del.

I. OBJETO DE LA DECISION

Se resuelve el recurso apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto interlocutorio nro. 843 del 18 de noviembre de 2019 proferido por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali que rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la cosa juzgada.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA, el señor José Fernando Salazar Bolaños a través de apoderado judicial demandó al Departamento del Valle del Cauca, para que se declare la nulidad del siguiente acto administrativo:

- Resolución nro. 3799 del 10 de diciembre de 2018, por medio de la cual se corrigió la Resolución nro. 8705 del 28 de octubre de 2015, con la cual se reconoció y ordenó el pago de la sanción moratoria ocasionada por la no consignación oportuna de las cesantías dentro del proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo del régimen anualizado la que se tramitó en el marco del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos-Ley 550 de 1999.

A título de restablecimiento del derecho solicitó, se declare que la entidad demanda debe pagar la sanción moratoria originalmente reconocida por la Resolución nro. 8705 del 28 de octubre de 2015, previo el descuento pagado

mediante la 3799 del 20 de diciembre de 2017, por la suma de \$20.426.924.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto inter ocutorio nro. 843 del 18 de noviembre de 2019 proferido por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali¹, rechazó la demanda por cosa juzgada, bajo los siguientes argumentos:

"De lo anterior, se desprende que la demanda no se integró en debida forma, pues no se acusó la totalidad de actos administrativos, relacionados con la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías producto del proceso de homologación objeto de la controversia, lo cual si bien es presupuesto de admisión, en esta oportunidad ello no resulta relevante para el estudio del presente asunto en la medida en que de la interpretación integral de la demanda se infiere que no existe reparo frente a la legalidad de dichos actos, sino únicamente frente a la Resolución No. 3799 del 10 de diciembre de 2018 por medio de la cual se corrigió parcialmente la Resolución No. 8705 del 28 de octubre de 2015, tal como se deduce de la individualización de las pretensiones, sin embargo, teniendo en cuenta que el proceso con Rad. 76001-33-33-016-2016-00103-00 proviene del Juzgado Deciséis Administrativo Oral del Circuito de Cali se desprende, que la demanda interpuesta por el aquí demandante contra el Departamento del Valle del Cauca y que atacaba la Resolución No. 8705 del 28 de octubre de 2015, se adoptó decisión de fondo mediante la sentencia No.78 del 31 de mayo de 2018 en la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por lo tanto se advierte que en el presente asunto ha operado el fenómeno jurídico de cosa juzgada.

"...

"ii) Identidad de objeto: Para determinar si está acreditada esta exigencia, no sólo se deben examinar los hechos de la demanda, sino también los fundamentos jurídicos de las pretensiones y contenido mismo del fallo, con el objeto de establecer si entre los dos asuntos existen verdadera identidad, requisito que se cumple, si se observa que si bien en el proceso con radicado No. 2016-00103 se solicitó la nulidad de la Resolución No. 8705 del 28 de octubre de 2015 que reconoció y ordenó el pago de la sanción moratoria originada por la no consignación oportuna de las cesantías dentro del proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo del régimen anualizado dentro del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos (Ley 550/1999) y en el asunto puesto a consideración de este Despacho conoce la legalidad de la Resolución "No. 3799 del 10 de diciembre de 2018" por medio del cual se corrigió la Resolución No. 8705 del 28 de octubre de 2015, por ser esta una unidad jurídica, se advierte que en la sentencia ejecutoriada que le puso fin a esa controversia resolvió de fondo la legalidad de la Resolución No. 8705 del 28 de octubre de 2015 y por tanto no le es dable a la parte actora pretender en esta oportunidad reabrir el debate judicial sobre una cuestión clausurada so pretexto de que la misma fue corregida si se tiene en cuenta que dicha corrección (Resolución 3799 de 10 de diciembre de 2018) se expidió seis meses después de la ejecutoria de la sentencia proferida por el Juzgado Deciséis administrativo Oral del Circuito de Cali".

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

¹ Folio 40

El apoderado judicial de la parte demandante, presentó recurso de apelación² argumentando lo siguiente:

"El objeto de la demanda presentada ante los estrados judiciales está encaminada específicamente a que se declarara la nulidad de la Resolución No. 3799 del 10 de diciembre de 2018, por medio de la cual se corrige la Resolución No. 8705 de octubre 28 de 2015, con la cual se reconoció y ordenó el pago de la SANCIÓN MORATORIA originada por la no consignación oportuna de las cesantías dentro del proceso de Homologación y Nivelación Salarial del personal administrativo de régimen anualizado la que se tramita en el marco del ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS- LEY 550 DE 1999 y como consecuencia de lo anterior, la entidad demandada debe pagar la sanción moratoria originalmente reconocida a mi mandante mediante la Resolución No. 8705 de octubre 28 de 2015, previo el descuento pagado mediante Resolución 3799 del 10 de diciembre de 2018 y de condene a pagar la suma de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$20.426.920).

"En la Resolución 8705 de 2015, la sanción moratoria liquidada en un 100% al actor es por la suma de \$52.106.792, suma a la cual se le aplica la cláusula 15 del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, que ordena pagar dicha sanción moratoria en un 70% del valor total más indexación a la fecha de iniciación del acuerdo, valores que corresponden a la siguiente liquidación que se encuentra expresa en dicho acto administrativo, así:

100% \$52.106.792 -70% \$36.474.754 – Indexado \$2.434.2015 total reconocido "\$38.908.965 Conforme lo anterior, la demanda en contra de este acto administrativo estaba encaminada a que pagaran el 30% que el Acuerdo le desconoce al actor, esto es, la suma de \$15.632.038.

En conclusión, las pretensiones es el pago del 30% que desconoce el Acuerdo y los argumentos jurídicos se basan en que no debían aplicársele dicho acuerdo por cuanto no fue convocado como acreedor del primer orden, al ser empleado del Departamento y cuando acude al llamado se le desconoce tajantemente su participación como acreedor al negársele la deuda y sin derecho a votar el acuerdo. Se pide por ende que se inaplique el acuerdo por devenir de la vulneración de derechos y garantías laborales y con amplia jurisprudencia al respecto.

"En cambio, en la demanda que pretende rechazar el A-quo, la pretensión principal, una vez (sic) declarada la nulidad total del acto administrativo, es pagara lo reconocido la Resolución 8705 de 2015, es decir la suma de \$38.908.965, previo descuento del valor que reconociera la Resolución 3799 de 2019, por la suma de \$18.842.045, lo que arroja como valor de la pretensión la suma de \$20.426.920.

"Los argumentos jurídicos en que se basa la demanda son supremamente claros y totalmente diferentes a los expuestos en la demanda de la Resolución 8705 de 2015, y que prácticamente se fundamentan en la violación de los artículos 44, 45, 94, 95 y 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."

² Folio 45

V. CONSIDERACIONES:

5.1 Competencia

De conformidad con lo previsto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación presentado contra la providencia de primera instancia.

Además, de conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el auto que rechaza la demanda es susceptible del recurso de apelación, siendo competente en segunda instancia el Tribunal para desatar el mismo. La norma en comento señala lo siguiente:

"Art. 243.- Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.

"..."

5.2 PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer:

- ¿Si en el presente asunto se encuentra configurada la existencia de una cosa juzgada por el cumplimiento de los tres requisitos: i) identidad jurídica de partes; ii) identidad de objeto e iii) identidad de causa?

5.3 TESIS

Se revocará la providencia apelada, toda vez que en el presente asunto pese a que las partes intervinieron previamente en el proceso con radicado nro. 2016-00103, tramitado por el juzgado Dieciséis Administrativo del Valle del Cauca el cual culminó con la sentencia nro. 78 del 31 de mayo de 2018 y los actos administrativos demandados en dicho juzgado y en el actual proceso se expidieron en el marco del reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías por el proceso de reestructuración al que se sometió el Departamento del Valle del Cauca en virtud de la Ley 550, lo cierto es que, no se configuró una identidad de objeto y causa que demuestren la configuración de una cosa juzgada.

Para arribar la anterior decisión, se realizará: i) la Cosa Juzgada, y ii) aplicarlo al caso concreto.

5.4 COSA JUZGADA:

Como bien se indicó en el problema jurídico planteado, deberá analizarse la presunta configuración de cosa juzgada, por cuanto en una anterior oportunidad la el señor José Fernando Salazar demandó ante esta jurisdicción la Resoluciones



Nos. 8705 del 28 de octubre de 1995, que le había reconocido el 70% de la sanción moratoria; pretensión que fue negada mediante sentencia No. 78 del 31 de mayo de 2018 proferida por el Juzgado Dieciséis Administrativo de Cali, proferida en el proceso nro. 76001-33-33-016-2016-00103-00.

En este sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ, en sentencia del 10 de noviembre de 2005, señaló al respecto:

"Esta institución procesal ha sido establecida por la ley como una de las expresiones de la seguridad jurídica, entre otras tantas en las cuales se manifiesta este valor social. En particular, se presenta en materia jurisdiccional y su propósito es lograr la intangibilidad y la inimpugnabilidad de las decisiones de esta naturaleza, como un mecanismo que brinda seguridad y credibilidad en las decisiones que se adoptan, o como dice Eduardo J. Couture "...es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla."³

(...)

Las anteriores consideraciones conducen a predicar el carácter de irrevisable que tiene, en principio⁴, la decisión judicial, porque lo propio de ella es que el tema no pueda volverse a someter a otro debate en el futuro⁵, por lo que el funcionario judicial que se percate de su existencia debe abstenerse de iniciar una nueva discusión sobre los puntos decididos en un juicio anterior, pues una conducta diferente atentaría contra la certeza jurídica que busca garantizar.

Desde luego que ese deber de abstención que tiene el funcionario judicial es de doble vía, pues también los ciudadanos -y aún más los abogados que los representan en juicio- han de abstenerse de iniciar un proceso donde se controviertan los mismos hechos y los mismos derechos que han sido definidos en otro proceso judicial, pues esto, a la vez que atenta contra la cosa juzgada, incide desfavorablemente en la eficiencia de la administración de justicia, al dedicársele tiempo valioso a un proceso que ya ha sido decidido con antelación.

(...)

A partir de esta norma, y para efectos del presente proceso, hay que destacar que los requisitos establecidos en ambos códigos, para que se configure la cosa juzgada, son tres (3), cuya presencia debe ser concurrente: que los procesos versen sobre el mismo objeto, que tengan la misma causa y que exista identidad jurídica de partes. Con lo que ha denominado la doctrina, la trilogía de identidades.

Sobre la identidad jurídica de partes, es claro que si se trata exactamente de las mismas partes que actuaron en el proceso anterior y que actúan en el nuevo, entonces sin duda se cumple este requisito, pese a que la norma lo que exige es la "identidad jurídica de partes", lo que denota que físicamente no tienen que ser

³ Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Ed. De palma. Buenos Aires. Tercera edición. 1958. Pág. 401.

⁴ Se dice, en principio, porque existen mecanismos judiciales extraordinarios que afectan la cosa juzgada, que no es del caso analizar en esta ocasión.

⁵ Hay que aclarar que, desde luego, algunas decisiones judiciales no alcanzan a ser definitivas, porque son susceptibles de revisión posterior mediante otra sentencia, como ocurre con la asignación de alimentos para los menores; pero no es del caso extenderse sobre estas excepciones en esta providencia.

necesariamente las mismas personas. No se trata, pues, de una identidad física, sino jurídica.

En cuanto a la identidad de objeto en ambos procesos, el tratadista Hernán Fabio López Blanco explica de manera adecuada la problemática que existe en torno a este requisito, pues, para algunos autores, el objeto del proceso se encuentra en las pretensiones, mientras que para otros se halla en la sentencia. Para este autor "... las dos posiciones son acertadas porque el objeto del proceso no sólo se encuentra en las pretensiones, lo cual equivale a aceptar que igualmente debe buscarse en los hechos en que aquellas se apoyan, sino también en lo decidido en la sentencia, y es por eso que en orden a precisar si existe el mismo objeto en el nuevo proceso deben estudiarse los hechos y pretensiones del segundo a fin de precisar si existe identidad y, caso de darse los otros requisitos, declarar la existencia de la cosa juzgada."⁶

(...)

Para la Sala el objeto del proceso radica no sólo en las pretensiones sino también en la sentencia como un todo, pues la pretensión es sólo el petitum de la demanda, mientras que el proceso judicial también se ocupa de revisar los hechos en que el mismo se apoya, para definir si, en caso de ser ciertos tal como se plantean y se prueban, se pueda seguir una determinada decisión judicial. En este orden de ideas, resulta claro que lo sometido al proceso no es sólo la pretensión sino también los hechos que la fundamentan, resumidos en la sentencia que declara alguna de las posibilidades jurídicas planteadas en el proceso.

La identidad de causa se refiere a que las razones fácticas por las cuales se demanda sean las mismas. De manera que cuando la causa de la demanda es la misma, se configura este tercer supuesto de la cosa juzgada. De no ser exactamente así, el proceso es diferente y no se configura esta institución procesal." (Resalta la Sala)

Atendiendo lo dispuesto por el Consejo de Estado, se tiene que la cosa juzgada tiene como propósito lograr la intangibilidad e inimpugnabilidad de las decisiones judiciales, con el objetivo de brindar una seguridad jurídica, evitando que tanto los administradores de justicia, como los ciudadanos inicien procesos donde se controvertan los mismos hechos y derechos que ya fueron definidos judicialmente.

De esta manera, para configurarse la existencia de cosa juzgada se debe verificar el cumplimiento de tres requisitos: i) identidad jurídica de partes; ii) identidad de objeto; e iii) identidad de causa.⁷

En cuanto a la primera condición, la precitada jurisprudencia dispuso que se trataba cuando en el proceso nuevo acudían exactamente las mismas partes que acudieron al proceso anterior. Seguidamente, sobre la identidad de objeto indicó que se debía analizar tanto las pretensiones, como la sentencia, para tener claridad de los hechos en los que éstas se fundamentaron. Y finalmente, respecto al último requisito expuso que se refería a que las razones fácticas que motivaron la interposición de la demanda, debían ser las mismas.

⁶ Procedimiento Civil, Parte general. Tomo I. Editorial Dupré. Novena edición. Bogotá. 2005. pág. 644.

⁷ Ver artículos 189 del CFACA y 303 del CGP.



5.5 CASO CONCRETO

Así las cosas, procederá esta Sala a revisar el cumplimiento de los mencionados requisitos, con la finalidad de determinar si en el presente asunto se ha configurado la cosa juzgada.

i) Identidad de partes:

En el proceso identificado bajo el radicado No. 2016-0103 acudieron como partes el señor José Fernando Salazar Bolaños, en calidad de demandante, y el Departamento del Valle del Cauca, como demandado⁸. A su vez, en el presente caso actúan las mismas partes.

De esta manera, se presenta una identidad de partes en ambos procesos.

ii) Identidad de objeto:

En principio, el señor José Fernando Salazar Bolaños acudió a esta instancia judicial para demandar las Resoluciones Nos. 8705 del 28 de octubre de 2015 por medio de la cual se reconoce la sanción moratoria del personal administrativo del régimen anualizado, en virtud del Acuerdo de Reestructuración- Ley 550 de 1999 por la mora en la consignación de Pasivos de los excedentes de las cesantías anualizadas al fondo de cesantías al cual pertenece o perteneció el actor, y que le fuera consignado en el año 2010; y solicitó:

"DECLARAR que la entidad demandada debe liquidar nuevamente a mi patrocinado(a) la SANCIÓN MORATORIA de que trata la Ley 50/90, en artículo 99 numeral 3, sobre el 100% del valor adeudado, y no como lo pretende pagar en un porcentaje del 70%, para lo cual deberá tener sumo cuidado de incluir las horas extras, dominicales, festivos y los recargos nocturnos correspondientes al año 2000 que no fueron liquidados, así como la sanción correspondiente al años 2007, equivalente a 365 días de mora, y la del año 2008, equivalente, para los afiliados a fondos privados de cesantías, a 90 días de mora, y para los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, a 645 días de mora, ya que tampoco fueron liquidadas.

"DECLARAR que se INAPLIQUE POR INCONSTITUCIONAL el contenido del Acuerdo de reestructuración de pasivos, en que se ampara la Resolución No. 8705 del 28 de octubre de 2015, respecto a reconocer solamente el 70% de la deuda, pues se evidencia que con los mismo se evade total o parcialmente la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías en que se encontraba afiliado a la época en que la entidad territorial estaba en la obligación de hacerlo, en consecuencia a lo esgrimido en la Jurisprudencia del Consejo de Estado, tal y como lo expuso la Sección Segunda, Subsección B, con Ponencia de la Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez, en sentencia de 17 de enero de 2011.

Por su parte, en esta oportunidad el demandante pretende que se declare la nulidad de la Resolución nro. 3799 del 10 de diciembre de 2018, por medio de la cual se corrigió la Resolución nro. 8705 de octubre de 2015 que reconoció y

⁸ Folio 40 del expediente.

ordenó el pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías dentro del proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo de régimen anualizado y como consecuencia de lo anterior, solicitó que la entidad demandada le pagar la sanción moratoria originalmente reconocida mediante Resolución nro. 8705 del 28 de octubre de 2015, previo el descuento pagado mediante la Resolución nro. 3799 del 20 de noviembre de 2017, por la suma de \$20.426.924.

Conforme a lo señalado, si bien el acto administrativo que se controvierte en este proceso nace como consecuencia del pago de la sanción moratoria reconocida al demandante, debe tenerse en cuenta que lo perseguido en ambos litigios no es la misma pretensión; razón por la cual, no se evidencia la identidad de objeto que se presenta en ambos casos, como se verá a continuación.

iii) Identidad de causa:

En el presente asunto no se presenta una identidad de causa por las siguientes razones:

El señor José Fernando Salazar Bolaños inicialmente demandó al Departamento del Valle del Cauca para que se declarara la nulidad de la Resolución nro. 8705 de octubre de 2015 "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE LA SANCIÓN MORATORIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CON REGIMEN ANUALIZADO, EN VIRTUD DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS- LEY 550 DE 1999...", y decidió en la parte resolutive reconocer la suma de \$38.909.969 correspondiente al 70% del sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías.

En dicha oportunidad el demandante consideró que la entidad territorial demandada debió reconocer el 100% del valor correspondiente a la sanción moratorio por el no pago oportuno de las cesantías.

El conocimiento de este medio de control correspondió al Juzgado Dieciséis Administrativo de Cali a través del proceso nro. 76001-33-33-016-2016-00103-00, que por sentencia nro. 78 del 31 de mayo de 2018, decidió negar las pretensiones de la demanda y confirmar así la legalidad de la Resolución nro. 8705 de octubre de 2015 proferida por el Departamento del Valle del Cauca, lo que significa que la entidad territorial se encontraba facultada para cancelar al demandante el 70% de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, valor que se estimó en \$38.909.969.

Sin embargo, con posterioridad a dicha providencia el Departamento del Valle del Cauca expidió la Resolución nro. 3799 del 10 de diciembre de 2018⁹ "POR MEDIO

⁹ Folio 16-26.



DE LA CUAL, SE CORRIEGE, en forma parcial la Resolución No. 8705 de octubre 28 de 2015, subrogado por la Resolución 9139 del 30 de Octubre de 2015 con la cual se reconoció el pago de la SANCION MORATORIA originada por la no consignación oportuna de las cesantías dentro del proceso de Homologación y Nivelación Salarial del personal administrativo de régimen anualizado a que se tramita en el marco del ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS-LEY 550 DE 1999..., en la que manifiesto que la Resolución No. 8705 del 28 de octubre de 2015 no alcanzó a surtir los trámites de pago en la vigencia anterior, por lo que los valores a cancelar debería ser ajustados teniendo en cuenta el nuevo Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Por tanto, al evidenciar un presunto error en la liquidación efectuada a través de la Resolución No. 8705 de 2015, determinó que el valor correspondiente al 70% de la sanción moratoria del señor José Fernando Salazar Bolaños equivale a **\$18.482.045**.

Por tanto, en el presenta medio de control el demandante solicita la nulidad de la Resolución nro. **03799 de 2018** que redujo el valor ya reconocido a través de la Resolución nro. 8705 de 2015, lo que no implica un análisis sobre el porcentaje de la sanción moratoria, 70% o 100%, sino que se encamina en determinar si la entidad demandada después de haber reconocido el valor de **\$38.909.969**, decisión que fue analizada por el Juzgado Deciséis a través de la sentencia nro. 78 del 31 de mayo de 2018, podía con posterioridad disminuirlo a **\$18.482.045**.

Lo anterior aunado al hecho de que el demandante en las pretensiones de la demanda actual solicitó se ordene al Departamento del Valle del Cauca dar cumplimiento a lo expuesto en la Resolución nro. 8705 de 2015 en donde se reconoció como sanción moratoria el monto de \$38.909.969, por tanto, se considera que el demandante no está reabriendo el debate zanjado con la sentencia nro. 78 proferida por el Juzgado Deciséis Administrativo.

Por tanto, del cuerpo de la demanda se desprende que lo que busca es que se ordene el pago de la diferencia entre la suma inicialmente reconocida por la Resolución nro. 8705 de 2015, \$38.909.969, y la Resolución nro. 03799 de 2018, \$ 18.482.045, que corresponde a \$20.426.924, valor estimado como cuantía del presente medio de control¹⁰.

En este orden de ideas, se observa que respecto a la pretensión principal de la demanda, no se configura el fenómeno de la cosa juzgada, por cuanto dicho asunto no fue definido mediante la sentencia No. 78 del 31 de mayo de 2018 proferida por el Juzgado Deciséis Administrativo de Cali, ya que el Departamento del Valle del Cauca con posterioridad a dicho pronunciamiento disminuyó el valor que inicialmente fue reconocido en la Resolución objeto de dicha providencia, lo que implica un nuevo proceso en el cual se debe analizar si el ente territorial con la expedición de la Resolución nro. 3799 de 2018 tenía la potestad administrativa

¹⁰ Folio 3 anverso.

de modificar un acto administrativo sin el consentimiento del administrado, análisis que no implica reabrir un estudio de legalidad de la Resolución nro. 8705 del 28 de octubre de 2018.

Por lo tanto, el auto interlocutorio nro. 843 del 18 de noviembre de 2019 proferido por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali, debe ser revocado y en consecuencia se debe continuar con el trámite correspondiente.

En consecuencia, se;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto interlocutorio nro. 843 del 18 de noviembre de 2019 proferido por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali.

SEGUNDO: En firme esta providencia, continúese con el trámite correspondiente.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

Los Magistrados

Los Magistrados,


ÓSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA


EDUARDO ANTONIO LUGO BARROS


OMAR EDGAR BORJA SOTO